

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca-

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 12 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Lic. Severo I. Reyes, en representacion de D. Francisco, D. Ramon y Doña Guadalupe Samaniego, contra los procedimientos del Juzgado 3º de Letras de la misma Capital, en las demandas presentadas por el C. Lic. Manuel Ambríz Moclesuma, apoderado de los Sres. Lagüera y Compañía, de aquel comercio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: Que el Sr. Lic. D. Severo I. Reyes, mandatario de los Sres. D. Francisco, D. Ramon y D^a María Guadalupe Samaniego, solicita amparo de la Justicia federal, en favor de sus representados, contra los actos del C. Juez 3º de 1ª instancia de la Capital, que con violacion de las garantías otorgadas por el art. 14 de la Constitucion general de la República, aplica las disposiciones del Código de procedimientos civiles, vigente en el Estado, al sus-

tanciar el juicio hipotecario que en su contra siguen los Sres. Lagüera y C^a, siendo que el contrato que constituye aquella obligacion, fué celebrado con anterioridad á su vigencia en el mismo Estado.

Ese Juzgado, en vista de tal peticion, y calificando de urgente el caso, con fecha 13 del que rige tuvo á bien decretar la suspension de los actos reclamados, con fundamento de los arts. 3º y 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, pidiendo en seguida el informe justificado que previene igualmente el art. 9º de la misma disposicion, el cual no fué rendido dentro del término legal, sino hasta las seis y media de la tarde del 20 del que rige.

Por las constancias que se han tenido á la vista del juicio, cuyos procedimientos se reclaman, el Ministerio ve que los hechos acusados han podido conciliarse de tal manera, al promoverse aquella accion hipotecaria por los vencimientos que los Sres. Lagüera y C^a exigen de los meses de Agosto de 1872 y 1873, señalados en la escritura de 14 de Mayo de 1871, que no creó que se haya faltado á la aplicacion de la legislacion propia y conveniente en el caso, ni menos que absoluta y únicamente haya sido aplicada la del Código de procedimientos civiles, como asegura el actor.

Así, pues, la cuestion suscitada por el representante de los Sres. Samaniego, se hace consistir en que habiendo sido otorgada la escritura de hipoteca en Mayo de 1871, segun se ha expresado, el cumplimiento ó ejecucion de ella debe exigirse conforme la legislacion anterior y no á la que demarca aquel citado Código, y se hace necesario, por lo mismo, ver si en efecto por los procedimientos del C. Juez 3º de 1ª instancia de la Capital, se han violado ó no, en los mandantes del peticionario, las garantías del art. 14 de la Carta fundamental de la República, para deducir si en efecto cabe ó no el amparo solicitado.

Ante todo, el mismo Ministerio ve que se trata de un asunto judicial, que á mas de

tener sus recursos ordinarios para exigir al funcionario acusado la responsabilidad en que pueda incurrir por sus procedimientos, no es admisible, por otra parte, el de amparo, conforme lo prevenido en el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que arregla la sustanciación de los juicios de esta naturaleza.

Y por lo que respecta á las prerogativas que el pacto fundamental concede en su art. 14 antes citado, tambien creó el Ministerio que no han sido violadas, porque tratándose de meros procedimientos ó sustanciación del negocio de que se ha hablado, el Código antes referido, segun el art. 18 de su ley transitoria, deroga todas las leyes de procedimientos civiles, existentes al tiempo de su promulgación, lo que convence de que las disposiciones anteriores, relativas al tratamiento de los asuntos judiciales, quedaron sin efecto, y esto lo determina mas expresamente aquella ley transitoria en sus arts. 1º y 2º, cuando dice que la sustanciación de los negocios pendientes se ejecutará en el estado en que se encuentren, sin mas restricción que la de que si los términos que nuevamente se señalen para algun acto judicial fueren menores que los que estuvieren ya concedidos, se observará lo dispuesto en la legislación anterior, así como que los recursos interpuestos ya legalmente, serán admitidos aunque no deban serlo, conforme al mismo Código, pero que se sustanciarán de la manera que este prevenga para los de su clase.

En consecuencia, y no perjudicándose por los procedimientos del Juez 3º de 1ª instancia los derechos adquiridos por los Sres. Samaniego, en virtud de aquella acción hipotecaria, pues el pago que se les exige tiene que efectuarse, bien sea conforme lo dispuesto en la anterior legislatura, ó bien por lo que rige, ninguna escepcion que no sea haberlo verificado, puede escusarlos de hacerlo, sea cual fuere el modo con que se exija, con tal que, como se ha dicho, los derechos adquiridos no sufran alteración alguna sus-

tancial. Por lo cual el Ministerio no es conforme en que se dispense el amparo que pretende el apoderado de los Sres. Samaniego, y ese Juzgado tendrá á bien así acordarlo, siempre que este su parecer lo creyere arreglado á justicia.

San Luis Potosí, Junio 23 de 1874.—
Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Julio 11 de 1874.—
Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Severo I. Reyes, en representación jurídica de D. Francisco, D. Ramon y Dª María Guadalupe Samaniego, contra los procedimientos que ha adoptado el C. Juez 3º de letras de la Capital, en las demandas que le ha promovido el C. Lic. Manuel Ambroz Moctezuma, apoderado de los Sres. Lagüera y Cª de este comercio y vecindad, exigiéndole el pago de los vencimientos 1º y 2º de la escritura hipotecaria de transacción otorgada en San Miguel de Allende, á 14 de Mayo de 1871, por ante el escribano D. Fermin Ramos, entre el Lic. D. Joaquín Chico, mandatario de los Samaniego y los expresados Lagüera y Cª, por creer que con aquellos procedimientos se viola en la persona de sus representados la garantía que sanciona el art. 14 de la Constitución; el escrito de queja y ampliación de éste, que con carácter de alegato presentó la parte de los Samaniego, en los que expresa que aplicándose al contrato enunciado por los dos vencimientos devengados la tramitación de los juicios hipotecario y ejecutivo del novísimo Código de procedimientos, siendo la escritura anterior á su vigencia, se viola la garantía invocada, en estos tres puntos:

1º: Respecto del primer vencimiento, en la expedición de la cédula hipotecaria sobre los terrenos de las haciendas obligadas que designó el actor, en haberse acortado los plazos, reducido el número de las excepciones admisibles y comenzado á pregonarse los

terrenos asegurados por la cédula para su remate.

2º: En haberse adoptado el juicio ejecutivo del mismo Código para exigir el pago del segundo vencimiento de la escritura, variándose así la acción aducida contra el precepto de que intentada una vez, no puede abandonarse para seguir otra, siendo así que esta demanda ha debido acumularse al juicio hipotecario, por ser la misma la acción, las personas y la cosa demandada anteriormente; haberse embargado nuevos terrenos de las fincas gravadas, á la sola designación del actor, como se hizo en la primera demanda, contra la facultad acordada al deudor, en la cláusula 6ª del contrato; el derecho que da al mismo deudor la ley anterior de procedimientos, de señalar los bienes que se le han de embargar, en caso de ejecución, y la regla de derecho de que *in alternativis si de contractu agatur electio est debitoris*.

3º: De que se le quita el recurso de reversion á la vía ordinaria, una vez que hoy causa instansea el juicio ejecutivo.

Visto el pedimento del C. Promotor fiscal, en que expresa que en su concepto, ni hay lugar á conceder el amparo solicitado, ni há debido darse entrada al presente juicio: no lo último, porque con arreglo al art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, no es admisible el amparo en negocios judiciales, además de que hay otros recursos ordinarios que hacer valer; ni lo primero, porque se trata de una mera sustanciación, respecto de la que no hay retroactividad, y que son los procedimientos del nuevo Código para exigir un pago de lo que se adeuda y demanda por la escritura de 14 de Mayo de 1871, los que han debido seguirse, lo comprueba el art. 18 de la ley transitoria, segun el que, están derogadas todas las leyes de procedimientos civiles anteriores, sin mas limitaciones que las marcadas en los arts. 1º y 2º de la misma ley transitoria. Visto el informe de la autoridad responsable en que despues de pedir se levante la suspensión de los procedimientos ordenada por este Juzgado, ex-

TOMO VII.—PARTE II.

presa en cuanto á la primera demanda, que adoptó la tramitación del juicio hipotecario mandando se expidiera la cédula á petición del actor, porque es menos gravosa y causa menos vejámen al deudor; pero no porque habia de seguir rigurosamente esa tramitación, como lo demuestra que no se han acordado los plazos, ni reducido el número de las excepciones admisibles al deudor, sino que se le ha concedido la mas amplia libertad de defensa, segun se ve en los autos originales que acompaña, protestando á la vez que el acreedor, que el remate no se hará segun las bases del nuevo Código; que si no se ha concedido la facultad de señalar bienes al deudor, ha sido porque la cláusula 6ª del contrato, en concepto del mismo acreedor, le da el derecho de señalar los terrenos que se hayan de embargar; además, que estando hipotecadas ya las fincas, el derecho de señalar bienes se lo ha quitado el deudor, porque se entiende que se anticipó á señalar los bienes que se habian de embargar, en defecto de pago; que se siguió en la vía ejecutiva del nuevo Código la demanda por el segundo vencimiento, porque no hay la identidad de personas, cosas y acción que se requiere para la acumulación; y que el acreedor ha podido, á su voluntad, adoptar el juicio ejecutivo por el segundo vencimiento; que no se negará la reversion á la vía ordinaria, sino que se otorgará esta al deudor en su tiempo y lugar; en sustancia, que los procedimientos que se han adoptado y seguirán adoptándose, se ha procurado y se procurará, que no sean tachados de retroactividad, no atacándose los derechos adquiridos por las partes, ó que hieran el fondo del negocio. Vista, por último, la citación para sentencia, lo demas que consta en autos, se tuvo presente y convino ver;

Considerando, 1º: Respecto de la observación del C. Promotor fiscal, de que no es admisible el amparo en negocios judiciales, que es un punto bien explorado que si cabe ese recurso en tales negocios, atento el precepto contenido en la frac. 1ª del art. 101

de la Constitución, que sin limitación alguna lo concede por actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, y si bien es cierto que tienen las partes, en un juicio, varios recursos ordinarios que hacer valer para que se les reparan los agravios que se les inferan por los actos de los Jueces ó Tribunales; también lo es que el amparo es un medio de obtener violentamente la reparación de la violación de garantías individuales, que son la base y el objeto de las instituciones sociales.

Considerando 2º, en cuanto á la petición de la autoridad responsable, de que se levante la orden de suspensión de sus procedimientos: que es de accederse á ella, respecto del juicio ejecutivo entablado por el segundo vencimiento, pero no por el hipotecario que ha servido de base para el primero, según se verá después, sin que obste que no es parte en este juicio la autoridad responsable; ni aun cuando lo fuera, porque no hay más recurso que el de responsabilidad contra el auto de suspensión; pero esto no habla con el mismo Juez de Distrito que puede decretarla en caso de que por lo alegado y probado resulte que no hay necesidad de mantenerla.

Considerando 3º, en cuanto á la cuestión principal: que el Juez federal debe limitarse á examinar si con los procedimientos del C. Juez 3º, se ha violado en la persona del quejoso la garantía que sanciona el art. 14 de la Constitución, sin divagarse en otras cuestiones que suscita el mismo quejoso, porque esto daría lugar á que se constituyera revisor de los actos del mismo Juez 3º, lo cual está prohibido, además de que dan lugar á otros recursos distintos del de amparo.

Considerando 4º: Que para que haya retroactividad en materia de procedimientos civiles, se necesita que la ley posterior que se aplique al hecho de que se trata, perjudique al interesado, objeto de ella, de manera que si se refieren solo á mera sustanciación, sin causar perjuicio, no se les puede llamar retroactivas.

Considerando, 5º: Que la escritura de 14

de Mayo de 1871, en virtud de la cual exigen Lagüera y Cº, á los Samaniego, el pago de los vencimientos primero y segundo, es anterior al Código de procedimientos civiles que se ha adoptado en los juicios respectivos, pues comenzó á regir en el Estado, en 1º de Abril de 1873.

Considerando, 6º: Que la cédula hipotecaria se mandó expedir por el primer vencimiento de la escritura mencionada, con arreglo al actual Código de procedimientos, que «ha introducido una innovación en el procedimiento hipotecario, que está intensamente enlazado con la reforma radical que introdujo el Código civil en el sistema hipotecario, mejorando notablemente la condición del acreedor, en perjuicio de los derechos del deudor; de suerte que en este punto no pueden aplicarse las disposiciones del Código de procedimientos á un negocio, sin considerar aplicables á él las del Código civil, dándose, por lo mismo, efecto retroactivo no solo á aquel, sino también á este.»

Que después de la expedición de la cédula hipotecaria, se han seguido en el cuaderno principal los procedimientos del juicio hipotecario, hasta publicarse el primer pregon; lo cual, por la misma razón que en el caso anterior, importa retroactividad en el procedimiento.

Considerando, 7º, respecto del juicio ejecutivo que se ha adoptado para exigir el pago del segundo vencimiento, que aunque se dice es con arreglo al Novísimo Código de procedimientos, no puede decirse que se viole con ellos la garantía que otorga el art. 14 de la Constitución, porque fuera de que el C. Juez 3º ha procurado conciliar los procedimientos nuevos con los antiguos, no siguiendo la prevención del art. 1,017 de dicho Código, es notorio que con esa salvedad es más amplio y benéfico al deudor el actual juicio ejecutivo, que el antiguo, además de que se promete la reversión á la vía ordinaria.

Por lo expuesto debía declarar y declarar:
1º: Que la Justicia de la Unión ampara

y proteje á D. Francisco, D. Ramon y D^a Guadalupe Samaniego, contra la expedicion de la cédula hipotecaria, decretada por el C. Juez 4^o de letras de esta Capital, y los demas procedimientos adoptados por el 3^o para exigir el pago del primer vencimiento de la escritura, de 14 de Mayo de 1871, por parte de Lagüera y C^a, por violarse con ellos el art. 14 de la Constitucion.

2^o: Que la Justicia de la Union no ampara ni proteje á los expresados Samaniego, contra los procedimientos del juicio ejecutivo adoptados por el C. Juez 3^o de letras de la Capital, para exigir á los quejosos el pago del segundo vencimiento, á virtud de aquella escritura, por no violarse con ellos el art. 14 citado.

3^o: Que se levante la orden de suspension de los procedimientos, en el juicio ejecutivo solamente, continuando respecto del hipotecario.

4^o: Que se devuelvan al C. Juez 3^o las actuaciones originales que acompañó á su informe, compulsándose testimonio de las constancias conducentes que señalare este Juzgado y el quejoso.

Hágase saber, publíquese en los periódicos y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

Lo mandó y firmó el C. Juez. Doy fé.
—Conrado Diaz Soto.—Donaciano Morroy, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 11 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Lic. Severo I. Reyes, en representacion de D. Francisco, D. Ramon y D^a Guadalupe Samaniego, contra los procedimientos del Juzgado 3^o de letras de la misma Capital, en las demandas presentadas por el C. Lic. Manuel Ambrís Moctezuma, apoderado de los Sres. Lagüera y C^a, de aquel comer-

cio. Visto todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando, 1^o: Que la escritura de transaccion, convenida entre los Samaniego y Lagüera y C^a, en cuya virtud se cobra á los quejosos el primero y segundo vencimientos de su adeudo, está suscrita el 14 de Mayo de 1871.

2^o: Que los procedimientos seguidos por la Justicia local para hacer efectivo el pago del primer vencimiento, son los del juicio hipotecario, establecido por el Novísimo Código de procedimientos civiles, que no ha empezado á regir en San Luis, sino desde el 1^o de Abril de 1873.

3^o: Que el juicio hipotecario establecido por ese Código, está íntimamente ligado con los procedimientos del nuevo Código civil, que mejora notablemente los derechos del acreedor; y su aplicacion, en el caso, perjudica los derechos legítimamente adquiridos por el deudor. (Art. 14 de la Constitucion).

Que los procedimientos seguidos para hacer efectivo el pago del segundo vencimiento, no son conformes ni á las leyes vigentes al tiempo de la celebracion del contrato de transaccion, ni á las prescripciones del nuevo Código, y en consecuencia son absolutamente arbitrarios é infundados. (Arts. 14 y 16).

Por las razones y fundamentos expuestos, se decreta:

1^o: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, en 11 de Julio último, en la parte que declara que la Justicia de la Union ampara y proteje á D. Francisco, D. Ramon y D^a Guadalupe Samaniego, contra la expedicion de la cédula hipotecaria, decretada por el Juez 4^o de letras de aquella Ciudad, y contra los demas procedimientos adoptados por el 3^o, para hacer efectivo el pago del primer vencimiento.

2^o: Se revoca la misma sentencia en la parte que desampara á los quejosos, y se decreta: Que la Justicia de la Union los ampara y proteje contra los procedimientos

arbitrarios del Juzgado 3º de letras de aquella Capital, al exigíles el pago del segundo vencimiento.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Aza.*—*J. José de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*S. Guzman.*—*Luis Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 14 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato, contra Ramon Mendoza, por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: En 28 de Enero del presente año, fué consignado al Juzgado del digno cargo de U. Ramon Mendoza, por el delito de circulacion de moneda falsa; y en las diligencias que constan en esta acta que se comenzó á instruir en la misma fecha resultó, que en la mañana del dia anterior Gregorio Vargas, de edad de diez años, fué á comprar un cuartillo de petróleo y trayendo en la mano seis reales que habia recibido vueltos despues de comprar el petróleo, Ramon Mendoza en la plaza de San Fernando le rogó que le comprara un real de jabon, para lo cual le dió un peso fuerte, recogién-

dole los seis reales que llevaba. Gregorio Vargas entró á una tienda á comprar el jabon, pero no le quisieron recibir el peso que habia recibido de Mendoza por ser falso, y cuando salió á buscarlo ya habia desaparecido. El jóven Vargas le dió parte á su padre Manuel Vargas, quien por las señas que le dió su hijo logró aprehender á Mendoza, que conducido ante el auxiliar del cuartel número 8 bonificó el dinero que habia recibido, prometiendo presentar al verdadero autor de la estafa, lo cual no cumplió, por lo que fué reducido á prision.

Este hecho es el que constituye el cargo que se hizo al procesado en la presente causa, en la que está demostrada la existencia del delito que motiva el proceso, supuesto que la moneda de que se hizo uso, segun la certificacion judicial y la calificacion hecha por dos peritos, es falsa.

Respecto de la culpabilidad de Ramon Mendoza, no hay mas datos que el testimonio de Gregorio Vargas y las presunciones que se deducen de haber bonificado el dinero que se le reclamó y de no haber cumplido la promesa que hizo de presentar al verdadero autor del delito.

Ramon Mendoza negó haber dado al jóven Gregorio Vargas un peso falso, explicando que habia bonificado el dinero que se le reclamó por evitarse molestias y porque así lo habia ordenado el auxiliar, no recordando si habia prometido entregar al autor de la estafa, porque cuando pasaron estos hechos estaba ébrio y que los testigos que habian de puesto contra él le tenian mala voluntad.

Estas escepciones no se justificaron en la averiguacion; pero constando la culpabilidad del procesado por el testimonio de Gregorio Vargas y por las presunciones de que se ha hecho mérito, no hay prueba legal bastante para fundar un fallo condenatorio.

El jóven Gregorio Vargas por su edad, y por hacer las veces de acusador, no es un testigo mayor de toda escepcion, de manera que su dicho no constituye ninguna presuncion.